



# La salvaguarda del patrimonio inmaterial como acuerdo social

Propuesta metodológica para la  
elaboración de planes colaborativos  
de salvaguarda del PCI



**Junta de Andalucía**

Consejería de Cultura  
y Patrimonio Histórico

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico

CONSEJERÍA DE CULTURA  
Y PATRIMONIO HISTÓRICO

Consejera de Cultura y  
Patrimonio Histórico  
Patricia del Pozo Fernández

Viceconsejera de Cultura y  
Patrimonio Histórico  
María Esperanza O'Neill Orueta

Secretario General de  
Patrimonio Cultural  
Juan Cristóbal Jurado Vela

Director General de Patrimonio  
Histórico y Documental  
Miguel Ángel Araúz

Director del Instituto Andaluz del  
Patrimonio Histórico (IAPH)  
Juan José Primo Jurado

Edita: Consejería de Cultura y  
Patrimonio Histórico.  
Junta de Andalucía

Proyecto financiado por el Mi-  
nisterio de Cultura y Deporte,  
Gobierno de España, con cargo  
a las ayudas, en régimen de  
concurcencia competitiva, para  
proyectos de salvaguarda del  
Patrimonio Cultural Inmaterial  
correspondientes al año 2019

© de la edición:  
Consejería de Cultura y  
Patrimonio Histórico.  
Junta de Andalucía

Coordinación de la edición:  
Instituto Andaluz del Patrimonio  
Histórico

COORDINACIÓN CIENTÍFICA  
Gema Carrera Díaz, IAPH

AUTORÍA  
Rívia Ryker Bandeira de Alencar  
Gema Carrera Díaz  
Eva Cote Montes  
Cristina Cruces Roldán  
Aniceto Delgado Méndez  
Isabel Durán Salado  
David Florido del Corral  
Andrés Forero Rueda  
Carlos García Bayona  
Ana María García López  
Sara González Cambeiro  
Cristina Isla Palma  
Luis Pablo Martínez Sanmartín  
Mónica Ortiz Sánchez  
Teresa Pacheco Albino  
Fuensanta Plata García  
Victoria Quintero Morón  
Cristina Sánchez Carretero  
Ana Saraiva  
María Pía Timón Tiemblo

EQUIPO EDITORIAL IAPH  
María Cuéllar Gordillo, Cinta  
Delgado Soler, Carmen Guerrero  
Quintero

APOYO EDITORIAL  
Deculturas S. Coop. And.

DISEÑO Y MAQUETACIÓN  
Manolo García nz



Esta obra está bajo una licencia  
Reconocimiento-NoComercial-  
SinObraDerivada 3.0 España  
Creative Commons.

Usted es libre de copiar, distribuir  
y comunicar públicamente  
la obra bajo las condiciones  
siguientes:

- Reconocimiento. Debe  
reconocer los  
créditos de la obra de la manera  
especificada por el autor o el  
licenciador.

- No comercial. No puede utilizar  
esta obra para fines comerciales.

- Sin obras derivadas. No se  
puede alterar, transformar o  
generar una obra derivada a  
partir de esta obra.

Al reutilizar o distribuir la obra,  
tiene que dejar bien claro los  
términos de la licencia de  
esta obra. Alguna de estas  
condiciones puede no aplicarse  
si se obtiene el permiso del  
titular de los derechos de autor.  
Los derechos derivados de usos  
legítimos u otras limitaciones  
reconocidas por ley no se ven  
afectados por lo anterior.

La licencia completa está  
disponible en:

[http://creativecommons.org/  
licenses/bync-nd/3.0/es/](http://creativecommons.org/licenses/bync-nd/3.0/es/)

AÑO DE EDICIÓN: 2021  
ISBN: 978-84-9959-395-1

# **La salvaguarda del patrimonio inmaterial como acuerdo social**

Propuesta metodológica para la  
elaboración de planes colaborativos  
de salvaguarda del PCI

## Presentación

Casi desde sus inicios, ya en la década de los 90 del siglo XX, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, incorporó, en su Centro de Documentación y Estudios, la perspectiva antropológica en las labores técnicas e investigadoras sobre patrimonio, labor que se hizo especialmente fructífera a partir de la *Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial* de UNESCO (París, 2003).

Así, la elaboración del Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía (2008-2014) constituyó para la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y para el Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España una de las grandes aportaciones metodológicas realizadas por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico en el ámbito del conocimiento y salvaguarda de este patrimonio, incorporándose su propuesta metodológica al Plan Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial aprobado por el Consejo de Patrimonio Histórico en 2011.

En la misma línea, la reciente creación de la Red de Agentes Informantes del patrimonio cultural de Andalucía (IAPH, 2020) garantiza la continuidad y actualización participativa de este instrumento de conocimiento que aporta al patrimonio cultural de Andalucía más de 1800 expresiones culturales difundidas a través de los más variados medios de difusión, incluyendo las dos principales herramientas fundamentales de difusión y publicación de los trabajos realizados en el Centro de Documentación y Estudios: la Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía y el Repositorio de Activos Digitales.

Por otra parte, uno de los objetivos del Atlas es detectar los riesgos y problemáticas que afectan a estas actividades con la intención de poner en marcha posibles planes de salvaguarda que exigen una coordinación entre

los protagonistas de este patrimonio, la ciudadanía y un marco institucional articulado. La evolución lógica de este proyecto, siguiendo la trayectoria desarrollada en el IAPH sobre el patrimonio inmaterial desde la antropología social, ha sido la de profundizar en el diseño colaborativo de planes de salvaguarda.

Con esta intención, el IAPH formuló el proyecto PES PCI: Guía metodológica para el diseño de Planes Especiales de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, cofinanciado por el Ministerio de Cultura y Deporte, cuyos resultados se muestran en la presente monografía. Conscientes de que la salvaguarda del patrimonio inmaterial depende de una gran variedad de actores sociales y de la coordinación de todos ellos, esta obra colectiva pretende sentar las bases metodológicas con el soporte técnico, conocimientos y agentes necesarios.

Por tanto, me complace presentar esta publicación, cuyo objetivo final es dotar a la administración cultural y a la sociedad de una herramienta versátil y exportable a distintos ámbitos patrimoniales y territoriales que garanticen el necesario acuerdo social e institucional para la salvaguarda de las manifestaciones y expresiones del patrimonio cultural inmaterial, contribuyendo así a la diversidad cultural y al desarrollo sostenible, inclusivo, equitativo y estable, especialmente en Andalucía.

# Índice

p. 09

## **Introducción**

Puntos de partida y estructura de la propuesta metodológica de los planes de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial como un acuerdo social

Gema Carrera Díaz

## **SESIÓN 1. LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL**

p. 19

### **Capítulo 1**

Medio siglo y una normativa internacional de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial: entre la diversidad cultural y el “mercado”

Gema Carrera Díaz

p. 52

### **Capítulo 2**

Los planes de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial en Brasil

Rívia Ryker Bandeira de Alencar

p. 75

### **Capítulo 3**

Los Planes Especiales de Salvaguardia y las metodologías participativas para la gestión del patrimonio cultural inmaterial en Colombia

Ana María García López,  
Andrés Forero Rueda

p. 94

### **Capítulo 4**

El inventario del patrimonio cultural inmaterial en Portugal: retrospectiva y retos para su conservación

Teresa Pacheco Albino,  
Ana Saraiva

## **SESIÓN 2. LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL EN EL ÁMBITO ESTATAL Y AUTONÓMICO EN EL ESTADO ESPAÑOL**

p. 111

### **Capítulo 5**

La salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial en España. Una visión desde la legislación estatal

Mónica Ortiz Sánchez

p. 132

### **Capítulo 6**

El Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial: una metodología compartida

María Pía Timón Tiemblo,  
Sara González Cambeiro

p. 150

### **Capítulo 7**

Aproximación al análisis comparado de las medidas de salvaguardia del PCI en la legislación autonómica española

Luis Pablo Martínez Sanmartín

## **SESIÓN 3. LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL EN ANDALUCÍA**

p. 171

### **Capítulo 8**

Las inscripciones del patrimonio cultural inmaterial en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Alcance y cauces de participación social para su salvaguarda

Fuensanta Plata García

p. 195

### **Capítulo 9**

El inventario como instrumento de salvaguarda. El Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía. “Un viaje de ida y vuelta”

Gema Carrera Díaz

p. 228

### **Capítulo 10**

El patrimonio cultural inmaterial de Andalucía en las listas de la UNESCO. Una mirada retrospectiva

Cristina Cruces Roldán

p. 249

### **Capítulo 11**

Catálogo de riesgos, medidas y buenas prácticas en la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial

Eva Cote Montes,  
Cristina Isla Palma

## **SESIÓN 4. DISEÑO DE UNA PROPUESTA METODOLÓGICA COLABORATIVA DE PLAN DE SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL**

p. 280

### **Capítulo 12**

¿Qué debe ser un plan de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial?

Gema Carrera Díaz,  
Fuensanta Plata García

p. 301

### **Capítulo 13**

La salvaguarda del PCI: trenzando acompañamiento etnográfico y procesos participativos

Victoria Quintero-Morón,  
Cristina Sánchez-Carretero

p. 317

### **Capítulo 14**

Todas las voces. La elaboración de mapas de actores para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial

David Florido del Corral

p. 336

### **Capítulo 15**

La documentación gráfica, sonora y audiovisual en la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial

Aniceto Delgado Méndez

p. 356

### **Capítulo 16**

Participación y gestión patrimonial en el IAPH: un taller participativo sobre el alcance de un plan especial de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial

Isabel Durán Salado

p. 368

## **Referencias bibliográficas y fuentes documentales**

p. 414

### **Carta de Andalucía para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial**





## **El patrimonio cultural inmaterial de Andalucía en las listas de la UNESCO. Una mirada retrospectiva**

Cristina Cruces Roldán,  
Departamento de Antropología  
Social, Universidad de Sevilla

## 1. Introducción

A fecha de julio de 2021, son siete las expresiones del patrimonio cultural inmaterial (PCI) de Andalucía presentes en las listas de la UNESCO. En la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (LRPCIH) han quedado reconocidos el flamenco (2010), la fiesta de los patios de Córdoba (2012), la dieta mediterránea (2013), la cetrería (2016), las tamboradas (2018) y los conocimientos y técnicas del arte de construir muros en piedra seca (2018). En el Registro de buenas prácticas de salvaguardia, la revitalización del saber tradicional de la cal artesanal en Morón de la Frontera (2011). Concentradas en apenas una década, todas estas inscripciones participan de la gran renovación paradigmática que alumbró la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de 2003, al situar el concepto de patrimonio muy lejos de los caducos términos de escasez, grandeza, monumentalidad o excepcionalidad que, como símbolo de cohesión y exaltación de la nacionalidad, había arrastrado desde el siglo XIX (García Canclini 1999, 23).

Las inscripciones citadas se insertan también en un recorrido de apreciación y acción sobre el patrimonio intangible iniciado ya años atrás por las instituciones y la Administración andaluzas. Promulgada la Constitución Española y constituida la Junta de Andalucía (1978), y mientras la Comunidad Autónoma iniciaba la década de 1980 con el diseño de su estructura orgánica, partidos políticos y sociedad civil buscaban señas de identidad con las que construir un proyecto y un discurso de participación democrática tras cuatro décadas de dictadura. En el marco de un difícil equilibrio entre territorios y competencias transferidas, y de las tensiones —nunca del todo resueltas— entre nacionalismo y regionalismo democráticos, la cultura andaluza se situó como idea-fuerza de una aspiración socialmente más amplia, que ocupó desde el sentimiento de identidad a la reclamación de derechos culturales y una serie de marcadores más concretos, como el problema de la tierra o el flamenco. Desde que la Junta de Andalucía recibiera las competencias sobre cultura en 1984, una estructura orgánica y una secuencia de acciones patrimonialistas han ido consolidándose a lo largo de casi cuatro décadas mediante instituciones, agencias y entes instrumentales, normativas, subvenciones, publicaciones, seminarios y jornadas, premios, declaraciones de bien de

interés cultural e inscripciones en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA).

En este decurso, la noción de patrimonio inmaterial fue tomando forma, no solo en su reflejo institucional, sino también como objeto de investigación académica. En cuanto a lo primero, se crearon las secciones especializadas en bienes culturales integradas en la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía (hoy, Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico), y en 1987 se constituyó la Comisión Andaluza de Etnología con sus planes de campaña anuales (Plan Andaluz de Etnología), ya desaparecidos. La fundación del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH, 1989) incorporó el patrimonio cultural inmaterial a su proyecto teórico-metodológico, y una planificación práctica ha promovido la publicación desde entonces hasta hoy de numerosos estudios monográficos en la revista *PH* y ha dado forma al Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía (Carrera Díaz 2009).

La Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, fue un respaldo normativo a estas iniciativas. En su momento significó un avance respecto a la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, al integrar explícitamente aspectos tangibles e intangibles en su breve Título VII de Patrimonio Etnográfico. Dentro del Título IV de Patrimonio Inmueble, se creó la figura de lugar de interés etnológico. La modificación de la normativa anterior en 2007 (Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía) alineó definitivamente la jurisprudencia andaluza sobre patrimonio con las teorías emanadas de la Convención de 2003, cambiando el Título del Patrimonio Etnográfico por el de Patrimonio Etnológico (ahora, Título IV). Si bien el texto no incluye explícitamente la categoría de patrimonio inmaterial, la de actividad de interés etnológico respondería al modelo, con la posibilidad de proteger el ámbito territorial vinculado a su desarrollo y los bienes muebles que se le asocien (artículo 61). Este mismo año de 2007, la norma básica del Estatuto de Autonomía para Andalucía estableció como uno de los principios rectores de las políticas públicas “la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural, histórico y artístico de Andalucía, especialmente del flamenco” (artículo 37.8), atribuyendo a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de cultura, a través de tareas de fomento, actividades, protección y difusión (artículo 68).

## 2. El entramado de la patrimonialización

España ratificó la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en 2006, y desde entonces se ha trabajado activamente en el ámbito de la salvaguarda del PCI en el país, el cuarto del mundo con más elementos reconocidos. cSon diecisiete las manifestaciones inscritas en la LRPCIH entre 2008 y 2020, y tres los proyectos inscritos en el Registro de buenas prácticas de salvaguardia. En 2011, se publicó el Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. En el haber de los procesos vividos en Andalucía, contamos también con una sólida trayectoria teórica sobre el PCI, una fuerte institucionalización y una organización profesionalizada y de gran solvencia técnica.

Pero la problemática sobre el PCI no solo se limita al núcleo descriptivo del objeto-patrimonio, sino que implica también a los “gestos”, esto es, la selección, valoración, aceptación y reconocimiento de las declaraciones institucionales (Ariño Villarroya 2012). En las inscripciones a las Listas, estos gestos construyen un complejo entramado que desborda con mucho lo que se han denominado “procesos de doble decisión” de la UNESCO (Bortolotto 2011). Una red compleja y cambiante de alianzas y afinidades, y también desconfianzas, competencias y obstáculos, las más de las veces al socaire de las decisiones de gobierno, donde convergen de forma escalonada y jerárquicamente intereses nacionales, regionales e identitarios (Kirshenblatt-Gimblett 2004; Peralta y Anico 2006; Harrison 2013).

Tanto a nivel estatal como autonómico, criterios políticos han marcado en España las estrategias de patrimonialización, participadas tal vez del prestigio que, en un entorno competitivo, supone la presencia en una organización como la UNESCO, donde todos quieren estar. En Andalucía, el flamenco y la fiesta de los patios de Córdoba son dos ejemplos en los que los gobiernos autonómicos y local han jugado un papel fundamental. El flamenco fue una propuesta encabezada por la Junta de Andalucía, que se acompañó de una amplia inversión en recursos y la implicación de todo tipo de instituciones. En particular, tras la aceptación final del Ministerio, cuando se desplegó en torno a la solicitud una amplia campaña y una proyección mediática inusitadas para favorecer la inscripción. También la candidatura de la fiesta de los patios de Córdoba (vale decir, como para el flamenco, “las candidaturas”,

pues ambas contaron con una negativa previa a su inclusión definitiva en la LRPCIH) fue encabezada por un gobierno, en este caso local, con la notable participación de dos asociaciones ciudadanas. El Ayuntamiento de la ciudad, con intervención directa de su alcaldesa, diseñó un primer proyecto en 2011, muy técnico y ajeno a la mirada antropológica; su informe contrario se leyó como un fracaso colectivo, en el contexto de frustración añadida por la pérdida de la candidatura cordobesa a la capitalidad cultural europea. El segundo y definitivo intento de 2012 fue acompañado de una serie de actuaciones del Ministerio de Cultura, la inscripción de la fiesta en el Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía y la coordinación desde la Junta de Andalucía de informes previos de catalogación, históricos y sociológicos, que permitieron la inscripción final. Como objetivos explícitos, el expediente planteaba rescatar el centro histórico de Córdoba de un deterioro urbanístico y social evidente: los patios resaltaban como símbolos de identidad de la ciudad, y se hacía preciso salvaguardar los rituales de exposición pública de estos espacios, en aquel momento decadentes en número. Sin embargo, los objetivos latentes del proceso supusieron también la incorporación de la fiesta a una estrategia más global de creación de marca-ciudad y de posicionamiento turístico de Córdoba, que en pocos años se ha visto asolada por la gentrificación del centro, la multiplicación de los apartamentos turísticos y, por supuesto, la masificación y despersonalización de la fiesta misma (Colmenarejo 2018; Manjavacas 2018; Hernández Ramírez y Quintero-Morón 2019; García del Hoyo, Jiménez de Madariaga y Castilla Espino 2019).

Dentro de la mecánica de confección de las candidaturas, los niveles de gobierno se traban, a su vez, con los de otras Comunidades, Ayuntamientos y Administraciones de diverso signo, dando lugar a propuestas que, en algunas ocasiones, han sido plurinacionales. Así, por ejemplo, el expediente final de candidatura conjunta del flamenco fue liderado por Andalucía, pero elevado al Ministerio de Cultura junto con las Comunidades de Extremadura y Murcia. Su primera formulación “Flamenco y música andalusí” (2004-2005) se había preparado dentro de la categoría de Declaración de las obras maestras del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad junto a Túnez, Marruecos y Argelia. Un modelo distinto fue el de las tamboradas, cuyo formulario se llevó a efecto con implicación de las Comunidades de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Región de Murcia y Comunidad Valenciana, y 17 de sus Ayuntamientos y comarcas. Aquí, la integración de instituciones, comunida-

des y agentes implicados tuvo que ver con el ámbito de la propia gestión. Ya existía el Consorcio Nacional de los Pueblos del Tambor y el Bombo de España, donde estaban representados todos los grupos y que, molesto inicialmente por no haber sido convocado, se incorporó también a la elaboración final del formulario. Pero la propuesta de patrimonialización partió de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, que llevó la candidatura inicial al Consejo del Patrimonio Histórico Español, órgano de colaboración entre la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas, cuya finalidad esencial es facilitar la comunicación y el intercambio de programas de actuación e información relativos al patrimonio cultural español. Fue aquí donde otras Comunidades como Aragón, Valencia y Murcia plantearon sus propias expresiones de toques de tambor, a resultas de cuya ampliación, y gracias al contacto directo entre director y técnico del Ministerio y la funcionaria responsable de la Comunidad Autónoma andaluza, se incorporaron también

Semana Santa en Baena, Córdoba (Marc Ballester i Torrents)



los tambores de las cuadrillas de coliblanco y colinegro de la localidad cordobesa de Baena.

La participación andaluza en la elaboración del expediente comportó la búsqueda de adhesiones a un proyecto de algún modo sobrevenido: tras el contacto con la presidencia de la agrupación de cofradías de Baena, se convocó una asamblea conjunta, facilitada por la organización en cuadrillas, donde se llevó a cabo la firma de la documentación relativa al consentimiento por la comunidad. Todo ello, en el marco de una serie de reuniones de las cinco Comunidades Autónomas implicadas, a los efectos de elaborar un documento final donde quedó patente la formación antropológica de sus redactores. Pero, incluso en este caso, y con la candidatura dispuesta para la convocatoria de 2016, las decisiones políticas determinaron la opción final del Ministerio de Cultura por las Fallas de Valencia, lo que hizo que se pospusiera la nueva solicitud de las tamboradas, con formulario renovado, para el año 2018.

Efectivamente, son los Estados partes los decisores últimos en la selección y presentación de las solicitudes ante la UNESCO, lo que también puede llevarse a cabo mediante candidaturas plurinacionales, como en España la dieta mediterránea (Chipre, Croacia, España, Grecia, Italia, Marruecos y Portugal, LRPCIH 2013), la cetrería (Alemania, Arabia Saudita, Austria, Bélgica, Emiratos Árabes Unidos, España, Francia, Hungría, Italia, Kazajistán, Marruecos, Mongolia, Pakistán, Portugal, Qatar, República Árabe Siria, República de Corea y Chequia, LRPCIH 2016), y los conocimientos y técnicas del arte de construir muros en piedra seca (Croacia, Chipre, Francia, Grecia, Italia, Eslovenia, España y Suiza, LRPCIH 2018). Aunque con participación de la Comunidad Autónoma andaluza, no ha sido la Junta de Andalucía la impulsora principal de estas candidaturas; las medidas de salvaguarda propuestas e implementadas por el Estado español en los formularios elaborados delatan la diseminación de esfuerzos que puede darse en este tipo de candidaturas. Significativamente, las inscripciones de la cetrería o la piedra seca tuvieron una escasa repercusión mediática en el país, lo que denota también diferentes niveles de implicación de los gobiernos y proyección pública que puedan tener unos y otros procesos de patrimonialización en función de la tramitación que sigan.

El caso más reciente de la piedra seca puede servir como ejemplo de un rápido procedimiento (la candidatura se inicia en 2016 y en 2018 es aprobada),

en este caso liderado por Chipre y Croacia. El Estado español, como parte de la propuesta internacional, trasladó a las Comunidades Autónomas a través de su Ministerio de Cultura la posibilidad de participar en la candidatura, para lo cual el elemento debía estar incluido o inventariado en los catálogos. Así sucedía en Andalucía, donde estaba presente en su Atlas del Patrimonio Inmaterial como parte de saberes, técnicas y procesos constructivos tradicionales. Otras Comunidades Autónomas aportaron referencias al producto material (las edificaciones), y algunas, como Cataluña, Galicia o Mallorca, contaban con escuelas, asociaciones o expertos institucionales. En Andalucía, el vacío de documentación precisa acerca del elemento, su localización o cuáles eran los agentes implicados en la piedra seca, hubo de cubrirse a través del contacto con las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Cultura, los Grupos de Desarrollo Rural, asociaciones, institutos de estudio y referencias externas, escasas en cualquier caso, en una dinámica “de arriba abajo” que trabara, *ex novo*, el diseño de la actuación. Todo ello, en una situación de desconocimiento y distanciamiento de las comunidades portadoras.

El formulario remitido a la UNESCO sobre los conocimientos y técnicas del arte de construir muros en piedra seca cita los valores de la expresión (la piedra seca es una forma de mantener el equilibrio ecológico, la agricultura sostenible, la ganadería y las redes de comunicación), pero también las amenazas que la asolan. Alude, entre las medidas de salvaguarda, a la promoción y mejora de estas técnicas, especialmente entre los más jóvenes, la documentación del elemento, la creación de asociaciones y redes internacionales y la certificación y la estandarización de las habilidades, apuntando que los Estados partes apoyarán la implementación de estas medidas a través de la identificación, listado, preservación, mantenimiento y, en definitiva, protección de paisajes, sitios y obras de piedra seca. En Andalucía, sin embargo, no verificamos las alusiones que se citan en el formulario respecto a que los Estados ya habrían elaborado planes para superar estas amenazas, ya sea restringiendo actividades perjudiciales, o alentando la reparación y restauración de los trabajos en piedra seca. Tampoco hay resultados apreciables posteriores a la inscripción en la Lista en 2018. Ello, a pesar de que la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía de 2007 establece especial atención a los bienes derivados en cuanto a estudio, difusión e investigación, con una labor de recogida en soportes materiales que garantice su transmisión a las futuras generaciones (artículo 63), y también en lo relativo a las



exigencias de adecuación del planeamiento. Lo que sorprende aún más, teniendo en cuenta que el paisaje del olivar andaluz, apuntado en el expediente de la piedra seca, es uno de los siete incluidos en la Lista Tentativa del Patrimonio Mundial de la UNESCO, y aspira a ser patrimonio mundial en 2023. La inexistencia de medidas de salvaguarda en funcionamiento, y el hecho innegable de que los protagonistas de los saberes de la piedra en seco están perdiéndose sin asegurar la transmisión, permiten preguntarse si no habría sido mejor destino, para esta y otras expresiones en riesgo, la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial que requiere Medidas Urgentes de Salvaguardia. O si sería adecuada, como prácticas y saberes, su calificación como actividad de interés etnológico, con la singular protección y tutela que les confiere el CGPHA a estas actividades, dentro de la que gozaría de preferencia a efectos de conocimiento, protección y difusión, además de concesión de subvenciones y ayudas.

Construyendo muro de piedra seca, Alanís, Sevilla (Alessandra Olivi)



### **3. Memoria, prácticas y protagonismo.**

#### **El papel de las comunidades**

En los expedientes de tramitación, la referencia a un ámbito común de memoria y práctica, frecuentemente ritualizada, es una constante compartida por los siete elementos andaluces inscritos en las Listas de la UNESCO. Conocimiento, práctica y oficios se consideran para la dieta mediterránea y la cetrería verdaderos “modos de vida” en el literal de los expedientes. Ocupación de espacios públicos o privados (patios cordobeses), configuración de paisajes, sostenibilidad, conservación de la naturaleza y vínculos con el medioambiente (saber tradicional de la cal, piedra seca, cetrería), bienestar y salud (dieta mediterránea), celebración, festividad (flamenco) son aspectos parciales de una apelación mayor y sustantiva a los sentimientos de comunión colectiva, al encuentro, al intercambio y al arraigo social presentes en todos los formularios, donde suele vincularse lo intangible a los lugares y a aspectos materiales como las artesanías. Sobrevuela en la redacción una integración de contenidos en torno al concepto “identidad”, que afectaría desde los grupos a las comunidades, en términos de clase, género (referencias al papel de las mujeres en el formulario de los patios o de la dieta mediterránea), edad (patios, tamboradas) o etnicidad (como en el flamenco, donde se resalta el papel esencial de la comunidad gitana). Los criterios de interculturalidad se ven favorecidos en las declaraciones plurinacionales (dieta mediterránea, piedra seca, cetrería), donde las referencias a las prácticas, conocimientos, técnicas y formas simbólicas y de comunicación recalcan aspectos comunes de cooperación y colaboración entre los Estados participantes, los diálogos y las continuidades históricas y la diversidad territorial de las expresiones mencionadas.

Estos valores son tan estimados por la UNESCO como la solidaridad, la concordia y el respeto mutuo, los vínculos con el pasado y la transmisión del elemento a las nuevas generaciones. Así lo expresa la Convención al apelar a cómo el “patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana”

(UNESCO 2003, art. 3). Si en el expediente de los patios cordobeses se alude a tradiciones, conocimientos y habilidades seculares, para la cetrería también se pone el acento en el uso de determinadas tecnologías y equipos modernizadores que acompañan a la expresión. Los textos participan de un sentido dinámico de la tradición, de recreación constante en respuesta a los cambios del entorno, compatible con la transmisión, con la diversidad y con la identidad, como parte del renovador concepto del PCI que orienta su redacción.

Caso distinto a los objetos son los gestos de patrimonialización. La activación y los procedimientos seguidos por las candidaturas elevadas a las Listas de la UNESCO desde Andalucía o con participación de la Comunidad Autónoma delatan las contradicciones que esconde la noción de salvaguarda, un modelo que dista mucho de funcionar como entorno sistémico e integrado

Fiesta de las Candelas, Puebla de los Infantes, Sevilla (Aniceto Delgado Méndez)



de voluntades e intereses. En el marco del debate acerca de las relaciones de poder y conflicto en el espacio patrimonial, de la exigencia de una coordinación y un consenso entre los portadores y las Administraciones y técnicos, de la aplicación por estos de metodologías participativas, pueden situarse las experiencias vividas por los elementos inscritos, ya se hayan postulado mediante candidaturas estatales o internacionales, ya afecten a un elemento (fiesta de los patios de Córdoba) o a varios (como las tamboradas). Aun asumiendo la preocupación real por la pérdida de arraigo del patrimonio cultural inmaterial, las Administraciones públicas no son independientes de los gobiernos, en cuyas decisiones intervienen desde razones de oportunismo político y búsqueda de prestigio comparativo respecto a otras organizaciones o territorios a voluntades personales. De otro lado, en la gestión real de estos procesos de patrimonialización sobrevuela cierta disparidad de criterios y metodologías de intervención.

Finalmente, es preciso detenernos en el papel, a menudo secundario, de las comunidades portadoras y transmisoras. Amparada en nociones como participación, significación o relevancia, la Convención de 2003 reconoce a estas comunidades como protagonistas y sujetos agentes de estos procesos. Sin embargo, solo en contadas ocasiones son las personas, individuos o grupos quienes inician los procesos de las candidaturas, intervienen en la definición del elemento o encabezan las actuaciones, dificultando, así, el salto semántico “de un patrimonio heredado a un patrimonio reivindicado” (Ruiz y Monné 2002, 183). Los estudios monográficos demuestran que las comunidades no suelen construir una agenda propia ni recibir el retorno de la información; apenas evalúan o supervisan el seguimiento de los compromisos asumidos por los Estados una vez aprobadas las candidaturas, e incluso pueden ser muy críticas con los resultados de la inscripción respecto a la salvaguarda y continuidad de los elementos inscritos, sometidos, a su vez, al dinamismo y la versatilidad que caracteriza las expresiones intangibles y a su polisemia interpretativa. La debilidad de sus tramas organizativas y su escasa representatividad en posiciones de poder suponen solo algunas de las desventajas comparativas que derivan de posiciones habitualmente subalternas y problemáticas tramas de representación (González Cambeiro y Querol Fernández 2014).

Partiendo de una caracterización del patrimonio en términos de transmisión y recreación y de “consenso colectivo para escenificarlo y experimentarlo

en el presente y para que tenga continuidad en el futuro” (Carrión 2015, 7), el Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2015 ha identificado entre los riesgos del PCI precisamente los que se denominan de “apropiación indebida”, tanto los “procedentes de agentes externos a la comunidad, cuando llevan a cabo réplicas” como los riesgos “exógenos generados por políticas de protección y salvaguarda que no reconocen la labor realizada por los interlocutores legítimos” (Carrión 2015, 22). Nos situamos en el escenario de una objetivación administrativa donde, aunque el espíritu de la Convención de 2003 reconoce la condición abierta, múltiple y sujeta al dinamismo de comunidades, grupos e individuos, la realidad demuestra no solo su instrumentalización, sino también su frecuente idealización y reificación (Waterton y Smith 2010; Villaseñor y Zolla 2012; Hertz 2015; Tauschek 2015). Una cosificación semántica que desatiende su diversidad interna, la heterogeneidad de las posiciones acerca de los patrimonios intangibles o incluso los intereses particulares de quienes las forman (Quintero-Morón 2005; Sánchez-Carretero 2012; Quintero-Morón y Sánchez-Carretero 2017). Es en este sentido que cabe afirmar que en estos procesos de patrimonialización, las comunidades suelen utilizarse más bien como “un factor explicativo y no como uno de los interrogantes principales que debieran ser explicados” (López López 2017, 61).

El pretendido acuerdo social con los actores implicados se ha llevado de forma diversa según los distintos procesos vividos en Andalucía. Dos ejemplos se acogen a la voluntad expresada por las comunidades de preservar y valorar un patrimonio que las identifica. Asociaciones o colectivos ciudadanos, organizados de modo más o menos formal, han tomado un papel muy activo en ellos, dentro de un debate más amplio para el que han servido de interlocutores. Además, han contribuido a una reflexión colectiva que ha marcado profundamente las estrategias de una Administración eventualmente concerned with modelos de investigación de acción participativa, en conexión directa con el marco académico. Son la fiesta de los patios de Córdoba y la revitalización del saber tradicional de la cal artesanal en Morón de la Frontera (Sevilla), única expresión inscrita, como se ha dicho, en el Registro de buenas prácticas de salvaguardia.

En la fiesta de los patios de Córdoba es de destacar el papel jugado por dos asociaciones, Patios y Rejas de Córdoba. Claveles y Gitanillas y Amigos



Producción de cal en  
Morón de la Frontera,  
Sevilla (Alessandra Olivi)

de los patios cordobeses, y también por un sector intelectual y técnico de la clase media de la sociedad local especialmente comprometido, protagonistas de esfuerzos de documentación y recogida de firmas (un anexo al expediente de 187 páginas de adhesiones) fundamentales para el proyecto. A la postre, estas asociaciones se sentirían invisibilizadas al negárseles la presencia en la VII Sesión del Comité Intergubernamental para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial donde se aprobó la candidatura, que tuvo lugar en París en 2012. Para los hornos de cal, la modalidad de “buenas prácticas” llevó consigo un formulario de otra naturaleza, que expuso y propuso un programa de revitalización con identificación de comunidades,

grupos e individuos conectados con la cal, una actividad tradicional que, a su vez, identifica a la propia localidad de Morón desde hace siglos. Fue precisamente el declive de la práctica artesana lo que suscitó la reacción de los caleros, la asociación que los representa, alguna empresa destacada y las autoridades locales, que se ven así reflejados en el expediente como protagonistas de la iniciativa. Los consentimientos citados en el expediente incluyeron tanto a la Asociación Cultural Hornos de la Cal de Morón como al propio Ayuntamiento y a un número de nueve caleros y asociaciones y personas físicas del vecindario, además de las adhesiones de instituciones y asociaciones relacionadas (Jiménez y Seño 2019, 1134).

En todo momento, los caleros se mostraron parte de las iniciativas y actividades de transmisión y difusión presentadas en el formulario. Los primeros objetivos del proyecto fueron los de concienciar sobre la práctica e importancia de este oficio y mejorar las condiciones de vida de los caleros, cuya actividad forma parte de la cultura andaluza y tiene una repercusión medioambiental innegable, a través de la conservación y renovación del hábitat en el que se lleva a cabo. La experiencia se documenta a partir de los propios hornos de cal, presentes en el Inventario de Arquitectura Popular de Andalucía desde 1992 y lugar de interés etnológico desde 2009, y de la Sierra de los Esparteros, de donde se extrae la materia prima: desde 2003 se despliega un movimiento socioterritorial para su preservación, y la Calera de la Sierra queda inscrita en el CGPHA en 2009. También participa en el proceso el Museo Cal de Morón, cuyas buenas prácticas se reconocen desde 2007 y que en 2014 se inscribió en la Red Española de Turismo Industrial (RETI). El informe presenta una serie de medidas de salvaguarda específicas, e incorpora otros proyectos, programas de aprendizaje llevados a cabo por artesanos y expertos, actividades de difusión y trabajos audiovisuales. La elaboración artesanal de cal se ha incluido en el Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía e insertado en un plan de salvaguarda integrador entre Andalucía y Marruecos a través del desarrollo funcional y horizontal del IAPH (Carrera Díaz 2016).

Sin embargo, la aquiescencia de las comunidades en los procesos de patrimonialización puede resultar apenas una formalidad en un conjunto compuesto, a su vez, por muchos otros actores. El apoyo andaluz a los proyectos de inclusión de la cetrería, encabezados por Arabia Saudita, o de la dieta mediterránea, son dos ejemplos paradigmáticos de estas dinámicas. En el



primer caso, se limitó a la remisión al Ministerio de Cultura de una carta de apoyo de la Sociedad de Cetrería de Andalucía, como respuesta a otra del delegado para España del proyecto de propuesta ante la UNESCO, 52 cartas de consentimiento de clubes de cetrería y asociaciones implicadas y algunos videos breves. Significativamente, España ni siquiera se cita entre los ejemplos de participación de las comunidades, grupos e individuos concernidos en los procesos de nominación que se incluyen en el apartado 4 del formulario. En el segundo de los ejemplos, la dieta mediterránea, la documentación andaluza incluye apenas cartas de adhesión de asociaciones a instituciones relacionadas con el elemento, y la identificación de las siete comunidades emblemáticas que se incluyen en este formulario —seleccionadas como casos donde aún está viva, se transmite, protege y celebra reconociéndose como parte de su patrimonio inmaterial común— limita su identificación española a la ciudad de Soria.

Entre los procesos de patrimonialización vividos en Andalucía, donde el papel de las comunidades ha ido al socaire de las acciones emanadas desde las instancias políticas, hay que volver a destacar las iniciativas de postulación del flamenco frente a la UNESCO, quizá las de mayor repercusión en términos de inversión económica, voluntad política y número de apoyos, directos o indirectos, de cuantos se han vivido en la Comunidad Autónoma. En dos momentos distintos, y siempre como objetivo prioritario para la Junta de Andalucía, se prepararon sendos expedientes. El primero de ellos, que integró flamenco y música andalusí (2004-2005), sufrió las discrepancias de color político de las que, por entonces, participaban el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma, así como una serie de déficits de tramitación que, sin embargo, se defendieron políticamente como resultado de la ausencia de riesgos previsibles de desaparición (Mellado Segado 2017). Con la oportunidad abierta con LRPCIH, el flamenco en la UNESCO volvió a convertirse en una prioridad, articulada en 2009 a través de la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura y el Instituto Andaluz del Flamenco. Un formulario más factible según las exigencias de la nueva Lista refrendaba la comprensión del flamenco como algo más que un arte escénico, en la línea del concepto holístico del PCI y englobando los cinco epígrafes en los que este se manifiesta: tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial, artes del espectáculo, usos sociales, rituales y actos festivos, conocimientos y usos relacionados con la



naturaleza y el universo y técnicas artesanales tradicionales (UNESCO 2003, art. 2). El flamenco como cultura superaba, al fin, “una mirada estrecha que lo condenaba a su ejecución práctica, su condición escénica, a simples aproximaciones clasificatorias y hasta a un anecdotario más o menos entretenido de sueltos biográficos” (Cruces Roldán 2014, 821).

La propuesta fue plenamente asumida por el Estado español, y el expediente se presentó en París junto a una amplísima lista de consentimientos de unas comunidades, delimitadas en número de siete: etnia gitana, familias y dinastías flamencas, peñas y asociaciones flamencas, artistas, críticos e investigadores, escuelas y academias flamencas e industrias culturales del flamenco. Salvo excepciones, comunidades escasamente organizadas o activas en cuanto a intereses corporativos, pero que respondieron generosamente a la solicitud mediante firmas en documentos con formato normalizado y referencias a convocatorias que cubrirían el criterio de participación (Macías 2019). Todo ello se verificaría en la multitudinaria campaña posterior “Flamenco soy”, firmada por celebridades, artistas y aficionados, difundida en festivales, convertida en hito para instituciones, emitida en medios de comunicación de masas y acompañada de actos formales y convocatorias escénicas al máximo nivel, con una notable difusión de marcado tono político. Se buscaba la complicidad de artistas, profesionales y también de la ciudadanía anónima, que podía registrar su apoyo a través de una página web y un *stand* móvil. Más de 20.000 adhesiones de 67 países distintos, tanto de personas físicas como de Ayuntamientos, Diputaciones, organismos, asociaciones e incluso el Congreso de los Diputados y la Casa Real, acompañaron el éxito de la empresa.

El impacto de la inscripción del flamenco en la LRPCIH (2010) fue más que notable en los medios y los discursos políticos al máximo nivel. El logro se vivió con alegría por las comunidades, aunque pronto surgieron las voces discrepantes o, al menos, escépticas ante lo que suponía un reconocimiento simbólico, descrito por algunos como paso a la dignificación de una cultura largo tiempo agraviada. Otros testimonios del momento anunciaban sus expectativas de promoción artística, autoestima y universalización en términos de inversión económica del sector público. Siendo el flamenco un arte comercialmente pujante, parecían periféricas aquellas otras cuestiones que apelaban al marco histórico e identitario de la cultura flamenca y aspectos antropológicos de sociabilidad, ritualidad o transmisión. Fueron los artistas,

sobre todo, y periodistas y responsables públicos quienes dieron más retorno a la inclusión del flamenco en la Lista; en la voz de los profesionales y la opinión mediada cupieron a la par la satisfacción, la esperanza, el escepticismo y la crítica más radical, tanto en términos teóricos como en los efectos prácticos que pudiera llegar a tener la inscripción. En este sentido, muchos de los compromisos asumidos en el expediente venían siendo, de hecho, parte de un amplio programa de ayudas que, desde 2006, se habían destinado a producción, festivales internacionales, observatorio de investigación, orientadas al tejido profesional, el tejido asociativo y los festivales flamencos. Algunas de ellas han ido desapareciendo con el tiempo; otras, permanecen activas. Se han sucedido, asimismo, las inscripciones en el CGPHA, como bien de interés cultural, de expresiones vinculadas al ámbito cultural flamenco, como la fiesta de verdiales, la escuela sevillana de baile, la escuela bolera, las zambombas de Arcos y Jerez de la Frontera o el fan-

Fandangos en la calle tras una noche de cruces de mayo, Alosno, Huelva (Aniceto Delgado Méndez)



dango de Huelva. La promulgación de la Ley del Flamenco iría en la línea de ampliar estas y otras políticas de difusión, promoción e investigación del flamenco como bien social y patrimonial de Andalucía, como su inclusión en el currículo escolar de forma más sistemática, además de ordenar la gestión de programas, garantizar políticas de cooperación y promocionar Andalucía como destino cultural.

#### **4. ¿Y después? Problematicar sobre los efectos de la patrimonialización**

Es difícil advertir una modificación radical en las políticas de salvaguarda que sea consecuencia de la presencia de las expresiones andaluzas en las Listas. Los formularios, como sabemos, incluyen un conjunto de compromisos asumidos formalmente por los Estados, pero la experiencia demuestra que, en general, no existen ni una evaluación ni un seguimiento sistemáticos de estas medidas. Responsabilidad que no solo es imputable a las instituciones; tampoco las comunidades han sido especialmente activas en la reclamación de dicha supervisión, desconocedoras, en general, de los entresijos de la gestión y faltas de una estrategia que las coordine con el Estado, las Comunidades Autónomas o los Ayuntamientos. Pasado el momento de júbilo que, en su caso, sigue al reconocimiento (el de la piedra seca, como se ha dicho, apenas tuvo repercusión), puede que todo esté aún por hacer. Sin la voluntad de poner en práctica y dotar de presupuesto a las actuaciones comprometidas, quedar en nada es un peligro cierto, más allá de que las inscripciones no impliquen un impacto negativo y refuercen de alguna manera las ideas de identidad y pertenencia.

Los ámbitos de la investigación y la protección (inscripción en el CGPHA) han sido escasamente acometidos, más allá de las voluntades particulares que, en el primer caso, han dado lugar a una considerable producción teórica, técnica y académica. Aunque han de reconocerse las tareas de documentación para la elaboración de los formularios, asegurar la preservación, la conservación o la transmisión de las prácticas resulta, en otros casos, deficitario: si escasas son las actividades de registro audiovisual de la tradición oral, colecciones de relatos de vida y musealización, limitado es el campo de



Zambomba en Jerez de la Frontera, Cádiz (Eva Cote Montes)

las subvenciones directas, y complejo, en un marco neoliberal, el abordaje de la protección del patrimonio inmueble vinculado. Sucede también que, en la práctica, muchas de las medidas propuestas para actividades vivas y sin riesgos de desaparición como los patios, el flamenco o las tamboradas son, en realidad, confirmación o extensión de iniciativas que ya se estaban o están llevando a cabo: aprendizaje, convocatorias festivas, agrupaciones, difusión, fomento, regulación normativa, artesanías, campañas de promoción, publicaciones...

Algunas voces son muy críticas. En unos casos apelan a la mejor conservación y fomento de algunas de las expresiones inscritas en las Listas a través del CGPHA; en otros, se pueden barruntar los riesgos de “morir de éxito”. Aunque habría que cuestionar que sean resultado exclusivo del reconocimiento de la UNESCO, en un mundo global donde la cultura patrimonial se

convierte en una mercancía más apta para el consumo, el éxito de afluencia a la fiesta de los patios o a algunos rituales relacionados con el flamenco roza la masificación turística, lo que contribuye a transformar el sentido original por el que se han inscrito como prácticas de sociabilidad, comunitarismo e identidad colectiva. En Córdoba, por ejemplo, “ir de patios”, la visita fundamentada en el gusto por la charla, el silencio o la contemplación del esfuerzo de las mujeres vecinas que los cuidan, la hospitalidad y generosidad que el formulario destaca ha desembocado en una fiesta multitudinaria, con largas colas, en especial los fines de semana, y una progresiva profesionalización para “poner el patio”, competitiva y que cada vez demanda más insumos externos. La actividad de la zambomba de Jerez y Arcos, adscrita al Catálogo, también vecinal y organizada en torno al cante de villancicos y canciones populares aflamencadas y flamenco mismo, vive en Jerez una situación similar que reconfigura el modelo tradicional (con todas las reservas aplicables al concepto “tradición”), dando lugar a una expresión comunitaria ya instalada en los circuitos turísticos y que despierta la curiosidad de cada vez más visitantes.

Las experiencias que hemos tratado en este texto nos sitúan ante un reto teórico-metodológico final, de dimensiones prácticas y hasta éticas: afrontar los patrimonios culturales desde su complejidad conceptual, por su sentido institucional como parte de las políticas culturales, o según la comprensión que de ellos tienen sus comunidades portadoras y transmisoras. Las expresiones que la UNESCO ha reconocido para Andalucía evidencian, de una parte, que estos procesos son el resultado del renovador proceso de conceptualización del PCI, una noción que revisa la *vieja noción*, magna y fosilizada, de los grandes patrimonios, en favor de un modelo holístico donde acciones, objetos, significados, experiencia transmitida, técnicas, conocimiento y percepciones se aprehenden de forma sistémica, “como un todo global, como una manifestación de la cultura, en sí misma compleja y completa” (Alonso Ponga 2009, 45). De otra, demuestran que la “vuelta de tuerca” teórica y de efectos prácticos en torno al patrimonio ha venido acompañada de un nuevo marco para las políticas de la representación, donde resulta apasionante tratar de responder a dos preguntas: de quién son los patrimonios, y quién decide, efectivamente, sobre sus procesos de selección y salvaguarda.